

recientes al Instituto de Fomento Industrial, IFI, han producido si acaso una leve resistencia debido a que su privatización estaba planeada incluso antes de que la nueva política económica entrara en vigencia. En otras áreas, tales como el sector energético, existen, por el contrario, enormes presiones en favor de la privatización de este sector estatal agigantado, el cual es percibido por todos -en general los consumidores afectados por la reciente crisis energética- como ineficaz, costoso, y fuente de prácticas de corrupción intensivas y extensivas.

Antes de finalizar esta sección, vale la pena una breve anotación acerca de un tema que merece análisis más profundos y cuidadosos: hasta ahora, ninguna de las reformas ha siquiera intentado enfrentar uno de los mayores defectos del Estado colombiano: su recurso continuo a prácticas clientelistas como mecanismo de distribución de bienes y servicios públicos entre clientelas particulares. Aunque las reformas dicen estar orientadas hacia un incremento de la eficiencia y una reducción de la burocratización y la corrupción, es dudoso que el solo recorte de algunas instituciones estatales pueda corregir tales prácticas, profundamente enraizadas en el sistema político colombiano.

3. La Política Social frente a los Problemas del Sector Popular

Algunos estudios habían previsto que las reformas, sobre todo aquellas de tipo económico, reducirían los niveles de empleo en el corto plazo y tendrían algunos efectos sobre el crecimiento en el largo plazo, obteniendo como resultado final "una economía más competitiva a nivel internacional ... pero con niveles reducidos en los ingresos reales, especialmente entre los estratos más empobrecidos de las ciudades, un deterioro de los indicadores sociales y una menor productividad laboral"⁸.

Para otros, no obstante, es demasiado pronto para predecir el impacto social de las reformas recientemente implementadas. Kalmanovitz, por ejemplo, sostiene que:

"no queda claro cómo se puede predecir el impacto del IVA o del desempleo causado por niveles mayores de eficiencia resultantes de la reestructuración tanto en el sector privado como en el público, sin conocer el balance de comercio exterior (si, por ejemplo, las exportaciones intensivas en trabajo crecen más que las importa-

8 Lora y Ramírez (1991), pg. 83, citado en Ocampo, José Antonio, "Reforma del Estado y Desarrollo Económico y Social en Colombia", en *Análisis Político*, N° 17, septiembre a diciembre de 1992, pg. 27.

ciones que reducen actividades intensivas en capital, entonces el empleo crecerá y eventualmente los salarios reales también) o si el ingreso crece más rápido que los nuevos impuestos o si estos son moderados" (Kalmanovitz, 1992:4)

Los efectos sociales reales de las reformas económicas actualmente en marcha son materia de intenso debate por estos días en Colombia y deben ser objeto de estudios académicos más rigurosos. Existen, por lo menos, dos tipos de efecto que pueden afectar el bienestar social debido a políticas económicas de corte neoliberal: uno es directo, a través de la reducción en el empleo debida a la reestructuración bien sea en el sector público o en el privado; el otro es indirecto, a través de recortes a la capacidad de gasto social del Estado.

En cuanto al primero, las reformas del Estado puestas en marcha hasta ahora han producido (o se espera que produzcan en los próximos tres años) el despido de 65.000 trabajadores y empleados medios, una figura equivalente al 8 por ciento de la fuerza de trabajo empleada en el sector público (que en su totalidad emplea cerca de 800.000 personas). La predicción pesimista calcula que el desempleo en el sector público puede alcanzar eventualmente unos 200.000 individuos, es decir el 25 por ciento del empleo en el sector estatal (Kalmanovitz, 1992: 7). El gobierno insiste en que la reforma no afectará más de 100.000 empleos, es decir, un 12.5 por ciento del empleo público en Colombia. Pese al relativamente bajo impacto en términos de número, la gravedad de este desempleo radica en las dificultades que estos trabajadores enfrentan al tratar de reingresar al mercado de trabajo por su escaso nivel de calificación.

El sector público en Colombia, sin embargo, nunca ha absorbido más del 9 por ciento de la fuerza de trabajo activa (de 12.000.000), mientras que el empleo privado ha absorbido cerca del 92 por ciento de ésta (López-Alves, 1990: 120). Los peores efectos, entonces, pueden surgir si, a causa de la reestructuración y a la innovación tecnológica, el sector privado se ve obligado a reducir drásticamente sus niveles de empleo. El impacto final de la internacionalización de la economía sobre la contribución del sector privado al empleo nacional todavía no se conoce a cabalidad. Ella probablemente producirá desempleo en los sectores productivos más expuestos a la competencia internacional. Algunos sectores tales como las maderas y las industrias de muebles, la industria metal-mecánica y algunas empresas agroindustriales han comenzado ya a sentir los efectos adversos de la reforma. No obstante, otras actividades económicas han crecido rápidamente, algunas a causa de su carácter cíclico -como la construcción-, y otras que han mostrado señales de una adaptación exitosa a una situación de economía abierta: este es el caso de las industrias para la exportación de calzado y confecciones, las cuales también se han visto beneficiadas por el mercado creciente que significa la integración con Venezuela.

Tal impacto, entonces, debe diferenciarse sectorialmente y regionalmente, y debe ser cuidadosamente examinado por los académicos en el futuro cercano. Mientras que algunos sectores y regiones pueden ser favorecidos por la inversión, el crecimiento y el empleo, otros pueden entrar en recesión como resultado de la apertura a la competencia. El reciclaje del desempleo será posible en el corto plazo, en la medida en que algunos sectores creen nuevos empleos para reemplazar los perdidos. Esto es, aparentemente, lo que sucedió en 1992 cuando, contrariando todas las predicciones, la tasa de desempleo cayó a un 9.1 por ciento, la más baja desde 1983⁹.

Las predicciones concernientes al empleo advierten contra la pérdida de dinamismo en el sector productivo exportador (el cual ya mostraba signos negativos en 1992), el probable incremento en las exportaciones rentistas tales como el petróleo (que posiblemente crecerán en 1994) y el crecimiento de las importaciones (debido a la liberalización como también a la disponibilidad de divisas gracias al narcotráfico), todo lo cual puede causar la pérdida de numerosos empleos. El incremento en el empleo producido por la industria petrolera resulta mínimo si se le compara con la cantidad de divisas que ésta genera, las cuales eventualmente pagarán las importaciones que sustituirán producción nacional (Kalmanovitz, 1992:7). Otra probable causa de desempleo en el largo plazo, es la tendencia al "desempleo estructural", el cual es causado por la brecha existente entre el tipo de demanda hecha por los empleadores y los bajos niveles de calificación de la fuerza de trabajo. Esta diferencia sólo puede ser superada gracias a altos niveles de educación y entrenamiento de la fuerza de trabajo, un cambio que sólo puede lograrse en el mediano o largo plazo.

Como se señalaba anteriormente, el impacto sobre el empleo no es la única vía por la cual puede verse afectado el bienestar social como consecuencia de las recientes políticas económicas. También está el impacto causado por eventuales recortes en el gasto social debido a la disciplina fiscal o a la disminución del tamaño del aparato estatal. Se anotaba al comienzo que el Estado colombiano ha sido tradicionalmente pequeño y pobre en términos de porcentaje del ingreso nacional que controla. En consecuencia, el gasto social también ha sido tradicionalmente bajo en el país.

Los esfuerzos realizados por el Estado en términos de política social durante las últimas décadas, si se les mide como porcentaje de PIB, han sido

9 La tasa de desempleo en las áreas urbanas ha evolucionado en la siguiente forma durante la última década: 1980:9.7%; 1981:8.2%; 1982:9.1%; 1983:11.7%; 1984:13.4%; 1985:14.1%; 1986:13.8%; 1987:11.8%; 1988:11.2%; 1989:9.9%; 1990:10.2%; 1991:9.8%. Ver: Libardo Sarmiento Anzola, "La Revolución Pacífica. Una Mirada Premoderna sobre los Derechos Sociales en Colombia", en *Economía Colombiana*, No. 238, Bogotá, Febrero-Marzo 1992, pg. 31.

inferiores al promedio latinoamericano. En 1984 alcanzó su punto máximo con un 9.4 por ciento. Durante los años siguientes, el gasto en educación, salud, vivienda y seguridad social perdieron en participación en el gasto total. El deterioro de la tasa de crecimiento durante los años ochenta afectó directamente la evolución de los indicadores sociales (al afectar el ingreso), como también indirectamente (como resultado de una menor disponibilidad de recursos públicos para financiar programas sociales). Comenzando a mediados de los años ochenta, el gasto público mostró una tendencia a la baja como proporción del PIB. Todo lo cual lleva a la conclusión de que el impacto negativo sobre el bienestar social no necesariamente proviene de la implementación de políticas neoliberales, sino que también, la recesión económica y la negligencia del Estado tienen una capacidad de impacto independiente de ellas. No obstante, la recuperación económica experimentada desde 1986 no ha tenido efectos favorables sobre los indicadores sociales o sobre el gasto público correspondiente. Esto podría constituir el reflejo de los efectos adversos iniciales producidos por los cambios estructurales introducidos en la economía desde entonces.

En todo caso, es evidente que, a pesar de la relativa mejoría de algunos indicadores sociales a lo largo de las últimas tres o cuatro décadas en Colombia (Ocampo, 1992: 23-26), todos los indicadores sociales se mantienen en niveles insatisfactorios en el país¹⁰. En 1985, la tasa de analfabetismo era 7.2 por ciento entre la población urbana, y 23.4 por ciento entre la rural; la expectativa de vida en el mismo año era 63.8 años en las áreas urbanas y 58.3 años en las rurales; la mortalidad infantil era 53.5 por mil en las zonas urbanas, y 81.0 por mil en las rurales.

Durante los años 80 la distribución del ingreso no mejoró sino que, al contrario, comenzando en 1983 las tendencias favorables observadas durante la década anterior se revirtieron parcialmente. En 1988 el coeficiente Gini era de 0.48, lo cual indica niveles de concentración del ingreso todavía muy altos: mientras que el 50 por ciento más pobre de la población obtiene el 17.6 por ciento del ingreso total, el 20 por ciento más rico controla el 54.7 por ciento del mismo.

Los indicadores de pobreza indican la persistencia de grandes desigualdades entre la población colombiana: si se mide por ingresos (el método línea de Pobreza), en 1990 el 48.9 por ciento de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza; si se mide por el grado de insatisfacción de las necesidades básicas (método NBI), en el mismo año el 36.6 por ciento de la población colombiana vivía en la pobreza¹¹.

10 Todos los indicadores que siguen provienen de Ocampo, 1992, pp. 23-28 y de Sarmiento, 1992, pp. 28-35.

11 Sarmiento, 1992, pp. 34-36. El método Línea de Pobreza (LP) mide la pobreza como ausencia

El gobierno, dentro de su plan de desarrollo "La Revolución Pacífica", ha lanzado lo que el mismo llama una política social agresiva. El Plan de Desarrollo contiene tres principios básicos que guiarán la evolución de la política social: el primero consiste en enfocar el gasto hacia los sectores más pobres de la sociedad; el segundo consiste en hacer énfasis en los subsidios a la demanda por sobre aquellos canalizados a través de la oferta de servicios estatales; el tercero es el diseño de un esquema administrativo más adecuado para la ejecución de la política social, básicamente mediante la delegación de muchas funciones al sector privado o la descentralización de aquellas que permanezcan bajo control del Estado. Las áreas consideradas como prioritarias en el gasto social por el Plan de Desarrollo son: educación básica, salud primaria, nutrición infantil y el suministro de agua potable.

Como resultado de la implementación del Plan entre 1990 y 1994, el gobierno predice una reducción de la pobreza en un número de 3.137.000 individuos, de los cuales 2.471.000 corresponderán a los efectos directos de los programas de vivienda social, extensión de la educación primaria y ampliación del cubrimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado¹². De acuerdo con los críticos del Plan, la agenda de política social actual, aunque sea presentada por el gobierno como un gran logro, apenas recupera los niveles de gasto social de principios de los ochenta. Con tales niveles, difícilmente logrará mantener los actuales indicadores sociales y compensar los costos sociales de las reformas neoliberales. Es decir, es posible que los indicadores sociales no empeoren, pero definitivamente las condiciones de vida de los más pobres no mejoraran ni tampoco disminuirán los indicadores de pobreza.

El principal problema que ha sido señalado con respecto a las expectativas del Plan de Desarrollo, es que a pesar de situar la política social como un objetivo central, no responde directamente a las condiciones estructurales que permiten y promueven la reproducción de la pobreza en Colombia: la extrema concentración de la riqueza y el ingreso. El aumento del gasto de educación es concebido como una solución de largo plazo para mejorar la distribución del ingreso. En el corto plazo, sin embargo, no se han adoptado otras medidas. Por el contrario, la

de la cantidad de ingreso necesaria para obtener los requerimientos alimenticios básicos y satisfacer otras necesidades de consumo básicas. También se le llama "pobreza de corto plazo", afecta más drásticamente a los pobres en zonas urbanas y puede ser parcialmente aliviada por aumentos en el empleo y/o los salarios. El método NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) mide la pobreza a través de una combinación de indicadores sobre la disponibilidad de vivienda, servicios públicos, educación y dependencia económica, señalando así las causas estructurales de la pobreza. Esta es una forma más adecuada de medir la pobreza en el sector rural, pobreza que sólo puede ser mejorada a través del gasto público y de reformas en la distribución de la riqueza tales como la reforma agraria.

12 Ver. Presidencia de la República, DNP, *La Revolución Pacífica ...*, pg. 675.

reforma tributaria, aprobada en el primer período legislativo de 1992, incrementa los impuestos al consumo que afectan por igual a todos los colombianos. Por el otro lado, algunas reformas estructurales tales como la redistribución de la tierra tanto en el campo como en las ciudades no aparecen dentro de la agenda del actual gobierno. La pobreza rural, por ejemplo, difícilmente podrá ser aliviada sin un esfuerzo serio de reforma agraria en el país.

Todos estos indicadores, junto con la ausencia de reformas profundas en la distribución del ingreso, la propiedad y la riqueza, constituyen a su vez, si no una causa inmediata, seguramente una condición que facilita y sirve de caldo de cultivo para la continuidad de la violencia cuando, como es el caso en Colombia, se mezclan con factores potencialmente explosivos como la exclusión política. La violencia debe ser considerada, además de la pobreza, como otra de las pesadas cargas que deben soportar los sectores populares colombianos.

La guerra continua entre las fuerzas armadas del Estado y las guerrillas, la mafia del narcotráfico y los grupos paramilitares, ha dejado miles de muertos en Colombia durante la última década. En 1988 un record de 8.526 personas fueron asesinadas o desaparecidas como resultado de la violencia política y social¹³. Desde entonces, las estadísticas sobre muertes violentas no han hecho más que emperorar. La gran mayoría de las víctimas en esta espiral de violencia son miembros de los sectores populares o líderes de sus respectivas organizaciones políticas y sociales. "Mientras que la población rural representa sólo una tercera parte de la población colombiana, más de la mitad y posiblemente hasta dos terceras partes de las víctimas de la violencia son campesinos, trabajadores agrícolas y otros habitantes de las zonas rurales" (Zamosc, 1990: 44). Entre enero de 1988 y Octubre de 1989, de acuerdo con los datos sobre derechos humanos consignados por una ONG, 142 líderes sindicales fueron asesinados por razones políticas, 26 desaparecieron, 38 fueron heridos y 55 fueron amenazados¹⁴. No resulta para nada sorprendente, entonces, que uno encuentre entre las particularidades que caracterizan el actual proceso político colombiano, una profunda fragmentación de la sociedad civil, una notoria ausencia de organizaciones y asociaciones sociales, y, concomitantemente, una ausencia de respuestas políticas al proyecto gubernamental de reestructuración política y económica. Tampoco es sorprendente que el gasto militar para el año de 1993 haya sido

13 León Zamosc, "The Political Crisis and the Prospects for Rural Democracy in Colombia, en *Journal of Development Studies*, July 1990.

14 Ver: Rocio Londoño, "Problemas Laborales y Reestructuración del Sindicalismo", en Francisco Leal y León Zamosc (eds), *Al Filo del Caos. Crisis Política en la Colombia de los Años 80*, Bogotá, Tercer Mundo Editores-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 2a ed., 1991, pg. 298.

incrementado hasta niveles sin precedentes, con la afectación que es de esperarse en el gasto previsto para programas sociales¹⁵.

5. Las Respuestas Políticas

Sería un error creer que el movimiento laboral colombiano haya tenido, alguna vez, la fortaleza para participar en términos iguales, junto con los gremios productores y el gobierno, en las decisiones concernientes a las distribución del ingreso social y la riqueza. Esto quiere decir que, a diferencia de muchos otros casos latinoamericanos, en Colombia nunca se desarrolló un Estado de Bienestar ni siquiera en alguna de sus versiones corporatistas, como pudo ser el caso en México o Brasil. De tal manera que las reformas que actualmente implementa el gobierno Gaviria no tendrán nunca un impacto comparable al de aquellos otros países.

Tal resultado se debe en parte a la debilidad histórica, tanto en el número como en términos políticos, del movimiento laboral nacional. Históricamente, los sindicatos nunca han logrado absorber más del 10 por ciento de la población trabajadora colombiana, y en 1992 el nivel de sindicalización cayó al 7 por ciento de la misma (Londoño, 1990 y López Alves, 1990).

En 1980, el empleo en el sector privado absorbía el 91.5 por ciento de la población económicamente activa, mientras que el sector público empleaba solamente el 8.5 por ciento. Sin embargo, la distribución de la fuerza de trabajo organizada favorecía al sector público: el sector privado empleaba al 63 por ciento de la fuerza de trabajo organizada mientras que el otro 37 por ciento trabajaba para el Estado. La densidad sindical en el sector privado totalizaba solamente 11 por ciento, siendo mucho mayor tradicionalmente en el sector público: 68 por ciento a finales de los años 70 (López-Alves, 1990: 12).

Durante los años 70, la mayoría de los trabajadores industriales y públicos estuvieron intensamente comprometidos en acciones colectivas y los sindicatos consideraron la colaboración con otros sectores del trabajo organizado como beneficiosa (para la muestra, el Paro Nacional de 1977). Los sindicatos del sector privado (en su mayoría confederados) los del sector público (en su mayoría autónomos) experimentaron un lento proceso de unificación y centralización que culminó a mediados de los años 80 con la creación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Hoy por hoy, la CUT absorbe aproximadamente el 60 por ciento de los trabajadores sindicalizados. Persisten todavía algunos sindicatos autónomos en el sector público, los cuales se han caracterizado tradicionalmente

15 Es preciso ahondar en el tema del gasto militar comparado con el gasto social, no sólo para el presente año, sino para la década de los ochenta en su conjunto.

por tener un liderazgo más radical y se han movilizado con el fin de cambiar el sistema actual de relaciones laborales en su sector.

Pese a esfuerzos favorables hacia la unificación, el movimiento laboral no ha sido aún capaz de superar su debilidad. Su continua debilidad tiene que ver con los problemas asociados a la reducción del empleo durante la crisis de los años 80, como también con el hecho de que muchos miembros de los sindicatos han decidido retirarse como resultado de conflictos políticos y de una pérdida de la capacidad de representación del liderazgo sindical. Aunque se anotó anteriormente, es preciso recordar aquí que las cifras de muertes violentas también han afectado en forma grave a los movimientos sindicales. Tales razones explican las bajas cifras mostradas por los indicadores de sindicalización. De todas maneras, si las actuales reformas políticas y económicas exigen una reforma profunda del aparato del Estado y de los partidos tradicionales, ellas también demandan respuestas urgentes por parte del movimiento sindical. Este también deberá cambiar en el sentido de volverse más representativo y democrático.

En lo que concierne a la reciente reforma administrativa, las reacciones más importantes en su contra han provenido de los sindicatos en el sector público, algunos de los cuales permanecen autónomos y otros confederados en la CUT. Sin embargo, la mayoría de las protestas han sido cortas y esporádicas, sin lograr el apoyo de sindicatos en otros sectores. Quizá el intento más amplio de conformar un movimiento amplio y representativo de protesta se dió con la convocatoria al paro nacional programado para mediados de febrero de 1993. En ésta, como en tantas otras ocasiones, la violencia se interpuso en el camino de la protesta legítima y organizada. Días antes hicieron explosión en Bogotá y otras ciudades del país varias poderosas bombas dispuestas presuntamente por Pablo Escobar con el fin de negociar las condiciones de su entrega. Ante esta situación, previendo un empeoramiento de la situación de orden público y amparado por el estado de excepción, el gobierno declaró ilegal el paro y dispuso medidas para evitar su realización. No es esta la primera vez en que la violencia acarreada por actores armados organizados en su lucha contra el Estado eliminan las posibilidades de organización y la protesta legítima por parte de otros actores sociales. En un país cruzado por una multiplicidad de violencias, la protesta legítima despierta sospechas, es fácilmente criminalizada y por ende, puede ser fácilmente obstaculizada también.

En cuanto a otros movimientos sociales, en especial los movimientos cívicos y campesinos, su desarrollo tuvo un ritmo de crecimiento significativo durante los años 70. Durante esa década, se dieron intensos esfuerzos de centralización al nivel nacional dirigidos, en muchas ocasiones por los partidos, movimientos y grupos de la izquierda, en particular por el partido Comunista.

Algunos sostienen que la principal falla de este proceso de movilización residió precisamente en la extrema politización del movimiento social. Esto tuvo

dos consecuencias negativas: por una parte, y particularmente debido a la influencia de la izquierda, los intereses y metas específicos de cada movimiento social particular resultaron subordinados a intereses y metas políticos más amplios, contribuyendo así a empañar y oscurecer las demandas específicas de los movimientos y retardando la configuración de identidades colectivas particulares. Por otra parte, la persistencia de la guerra de guerrillas afectó a los movimientos sociales en gran medida. Algunos de ellos (sectores del movimiento campesino, por ejemplo), se asociaron con y se subordinaron a los diferentes grupos guerrilleros. Otros intentaron mantener su autonomía en medio de la guerra, sin alcanzar mucho éxito. Al final, todos fueron víctimas de la criminalización y la sospecha y se tornaron en blanco de los ataques de las fuerzas armadas del Estado o de los grupos paramilitares que han sido parcialmente entrenados, armados y financiados por la mafia de la droga.

Como resultado, la década de los años 80 presenció una rápida decadencia y desintegración de todas las formas preexistentes de organización social popular. En el presente hay una crisis generalizada de los movimientos sociales y sus luchas. En el campo de la organización, la palabra clave es división. Hay una crisis de las coordinadoras, las asambleas, los frentes, las coaliciones, las alianzas, los movimientos cívicos, las comunidades religiosas y los movimientos agrarios. Quizá la única excepción en esta espiral de decadencia sea el movimiento indígena, el cual ha alcanzado niveles sin precedentes de cohesión y fortaleza tanto en el plano social como en el político. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), permanece intacta; además ha creado su propio movimiento político, la Alianza Social Indígena, la cual logró elegir delegados a la Asamblea Nacional Constituyente y luego tres senadores al Congreso de la República. Su éxito puede explicarse en parte por un largo e intenso proceso previo de construcción de una identidad colectiva centrada alrededor de la especificidad cultural del grupo. En todo caso, en mi opinión, el hecho de que el movimiento indígena sea el único sobreviviente de la debacle sufrida por los movimientos sociales en la última década, amerita un análisis que nos remita a las causas de su éxito y por ende nos ayude a explicar el fracaso de los demás.

En su conjunto, sin embargo, es evidente que los movimientos sociales, que en los años 70 y aún en los 80 eran considerados como la alternativa frente a las disueltas formas de representación de tipo partidista, han entrado en una crisis peor que la de los partidos. Esta crisis forma parte de la explicación de la falta de protesta social en contra de las políticas neoliberales llevadas a cabo por el gobierno, una ausencia que se hace todavía más notoria si se la compara con las explosiones sociales ocurridas en Brasil, Venezuela, o más recientemente en Ecuador. Finalmente, es necesario precisar que la fragmentación y la extrema desorganización del sector popular en Colombia precede por mucho la implementación de políticas neoliberales y está relacionada más con factores políticos

que económicos, de tal manera que resulta imposible imputarle esa fragmentación y desorganización social únicamente al fantasma del neoliberalismo.

En lo que toca a la izquierda, esta mitad del espectro político colombiano debe ser dividida, por lo menos analíticamente, entre la izquierda legal (grupos, movimientos y partidos), y la izquierda ilegal, es decir los movimientos guerrilleros que han jugado un papel clave en el proceso político desde mediados de los años sesenta, pese a estar fuera de la arena política legítima.

Dentro de la izquierda legal, pese a la existencia de numerosos pequeños grupos y cuasisectas, el partido más representativo ha sido sin duda el partido Comunista, creado en 1930 y el cual, hasta hoy, sigue la línea de la ya desaparecida Unión Soviética. Aunque nunca alcanzó más de un 5 por ciento de apoyo electoral, en ciertas coyunturas alcanzó respaldo significativo entre los campesinos de la zona cafetera oriental y sobre todo de los colonos asentados en nuevas zonas de colonización más allá de la frontera agrícola. También obtuvo relativo respaldo en algunos sindicatos en las zonas urbanas y entre los habitantes de barrios marginales en grandes ciudades como Bogotá.

Dos factores, por lo menos, explican su decadencia y su reducción en la década de los 80. En primer término, la crisis en los países socialistas y especialmente en la Unión Soviética, han dejado al Partido huérfano de un proyecto político creíble. Aún más: su terca renuencia a aceptar tal crisis y a renovarse en consecuencia ha dejado al propio Partido con menos credibilidad aún que su desgastado proyecto. En segundo lugar, y quizás más importante, está su ambigua posición frente a las guerrillas, la cual ha permanecido inalterada a pesar de un creciente rechazo a nivel nacional contra el proyecto, los métodos y las tácticas insurgentes. El Partido se ha negado tercamente a reconocer que la lucha armada ha perdido legitimidad entre los colombianos y por ende, ha aplazado erradamente un rechazo serio y sin compromisos al uso de la violencia como medio para obtener o conservar el poder político.

En parte debido a esta ambigüedad, el proyecto político de un frente unido de la izquierda, intentado con la creación en 1985 de la Unión Patriótica (UP) fracasó estruendosamente. Cinco años más tarde, estaba a punto de desaparecer luego de que 2.000 de sus miembros fueran asesinados por fuerzas estatales, paramilitares o desconocidos. Hoy por hoy, el Partido Comunista y la Unión Patriótica conservan sólo una pequeña voz en el debate nacional, y aunque continuamente rechazan el proyecto gubernamental, su escasa representación parlamentaria y su tradicionalmente bajo capital electoral constituyen débiles apoyos para darle peso a su crítica y sus propuestas.

En 1990, luego de la firma de un acuerdo de paz con el gobierno Barco y de su reincorporación a la sociedad civil, la guerrilla del M-19 (Movimiento 19 de Abril) formó un nuevo partido: la Alianza Democrática/M-19. Pese a la infinidad de oportunidades que, coincidiendo con el proceso de paz, se abrieron en esa

coyuntura para la creación y consolidación de una tercera fuerza política en Colombia, el momento se desperdició. El líder de la recién creada ADM-19, Antonio Navarro Wolf¹⁶, ha jugado el papel del caudillo tradicional, ha monopolizado el poder y el proceso de toma de decisiones dentro del movimiento y ha permitido o promovido la reproducción de prácticas antidemocráticas y clientelistas tanto hacia adentro como hacia afuera de la Alianza. Como resultado, muchos de los que se acercaron al movimiento (intelectuales, profesionales, sectores medios, estudiantiles) creyendo encontrar allí una nueva opción política, han regresado de nuevo a la apatía. Por otro lado, el movimiento carecía de una base social y regional previa que le sirviera de plataforma de lanzamiento. Sin embargo, y a sabiendas de tal carencia, el liderazgo de la ADM-19 optó por "brillar" en el nivel nacional, descuidando de plano todo esfuerzo por construir una base social, arraigada en las regiones y los movimientos sociales, que le sirviera de raíz y de sustento. Para completar la cadena de errores, en 1990, recién creada la Alianza, en el momento propicio para comenzar a construir en Colombia una verdadera oposición, audaz, inteligente, capaz de fiscalizar al gobierno y de ofrecer alternativas creíbles y viables, Navarro decidió entrar a formar parte del gobierno de Gaviria como Ministro de Salud del gabinete. A pesar de la clara orientación del programa de gobierno en un sentido neoliberal, la ADM-19 permaneció en el gobierno hasta finales de 1992 cuando decidió retirarse argumentando que no estaba de acuerdo con la privatización del Instituto de Seguros Sociales y que rechazaba la declaración gubernamental de una "guerra integral" contra la guerrilla y el narcotráfico. Desde entonces, la Alianza, con Navarro Wolf a la cabeza, ha intentado mostrarse como la punta de lanza de la oposición contra el proyecto neoliberal. Parecería ser ya demasiado tarde: la credibilidad ha sido perdida.

Las razones aducidas para explicar el fracaso de la AD/M-19, no pueden ser atribuidas a la violencia de los paramilitares o la represión estatal, como es el caso de la UP. En este caso se trató de un ejemplo claro de fracaso del liderazgo, de un fracaso en la organización, de fallas cometidas por aquellos encargados de poner en marcha un proceso de movilización y organización novedoso a nivel nacional antes de intentar llegar a la Presidencia utilizando los mismos métodos desprestigiados de la clase política nacional. Se fue demasiado rápido y se optó por el camino fácil. La mejor receta para desperdiciar una de las coyunturas más favorables para la construcción de alternativas políticas en Colombia.

En suma, por parte de la izquierda legal ha habido una ausencia de acciones políticas serias y concertadas, orientadas a crear una oposición fuerte

16 Quien sucedió al anterior líder, Carlos Pizarro, luego de que éste fuera asesinado durante la campaña presidencial de 1990.

y creíble frente a las actuales orientaciones políticas y económicas que emanan del gobierno. Tampoco parece que tenga la fuerza electoral para alcanzar posiciones sustanciales dentro del Estado mismo con el fin de impulsar cambios desde dentro. Por parte de los movimientos guerrilleros, embebidos como están en una confrontación sin tregua contra el Estado, poco espacio queda para la reflexión política, mucho menos para la construcción de una oposición coherente al proyecto neoliberal. Pero aún si sostuvieran tal posición, su escasa credibilidad y el rechazo generalizado de sus actividades violentas descuentan la posibilidad de que la Coordinadora Guerrillera pueda efectivamente asumir la representación de los sectores populares tanto en éste como en cualquier otro asunto a escala nacional.

Como conclusión, debe resaltarse la inexistencia de una representación organizada o de alguna coalición alternativa capaz de representar los intereses de los sectores populares actualmente en Colombia. El proyecto neoliberal puede contribuir indirectamente a esta creciente desorganización y fragmentación social si, como predicen algunos, logra alterar sustancialmente los indicadores sociales en el país. Sin embargo, su impacto hasta ahora no ha sido directo, en la medida en que no ha producido dislocamientos sociales abruptos como en el caso de Venezuela en 1989.

Más que el neoliberalismo, la amenaza para los sectores populares y para la democracia colombiana proviene de la conjunción de factores políticos que alimentan continuamente la violencia. Esta sí contribuye directamente a la desorganización social y a obstaculizar la participación activa de los sectores precariamente organizados. También contribuye indirectamente a través de las transformaciones que induce en el régimen político. Como resultado de la violencia recurrente, éste constriñe los espacios de participación y a la par con un aumento permanente en los gastos de seguridad, se ve obligado a recortar los ya deficientes recursos destinados al gasto social. Por lo tanto, el primer paso a adelantar con el fin de que los sectores recuperen su voz en el debate nacional consiste en terminar, de una vez por todas, la violencia que no sólo los amenaza físicamente sino que obstaculiza cualquier posibilidad de reconstruir los fragmentados o desaparecidos movimientos sociales y las organizaciones representativas. Sólo con una representación organizada en un contexto de resolución no violenta de los conflictos podrá darse paso a la democracia ampliada cuyas puertas fueron abiertas por la Constitución de 1991.

Bibliografía

- ECONOMÍA COLOMBIANA, Revista de la Contraloría General de la República, No. 238, febrero-marzo de 1992.
- FOXLEY, Alejandro. **Experimentos Neoliberales en América Latina**, México, Fondo de Cultura Económica. 1988.
- KALMANOVITZ, Salomón, "**El Modelo Económico Colombiano**", (mimeo), 1992.
- LONDOÑO, Rocío, "Problemas Laborales y Reestructuración del Sindicalismo", en Francisco Leal and León Zamosc (eds), **Al Filo del Caos. Crisis Política en la Colombia de los años 80**, Bogotá, Tercer Mundo Editores-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 1991.
- LÓPEZ-ALVES, Fernando, "Explaining Confederation: Colombian Unions in the 1980's", en **Latin American Research Review**, Volume XXV, Number 2, 1990.
- MEDINA, Medófilo, **La Protesta Urbana en Colombia en el Siglo Veinte**, Bogotá, Ediciones Aurora, 1984.
- NELSON, Joan M. (ed), **Economic Crisis and Policy Choice. The Politics of Adjustment in the Third World**, Princeton, Princeton University Press, 1990.
- OCAMPO, José Antonio, "Reforma del Estado y desarrollo económico y social en Colombia" en **Análisis Político**, No. 17, septiembre a diciembre de 1992.
- PERFETTI, Juan José, "Los beneficiarios del gasto público social al final del decenio de los ochenta", en **Análisis Político**, No. 15, enero a abril de 1992.
- REVÉIZ, Edgar and María José Pérez, "Colombia: Moderate Economic Growth, Political Stability, and Social Welfare", en Hartlyn, J. and Morley (eds), **Latin American Political. Economy Crisis and Political Change**, Boulder, Co., Westview Press, 1986.
- REVISTA COYUNTURA SOCIAL, Fedesarrollo.
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, **La Revolución Pacífica. Plan de Desarrollo Económico y Social 1990-1994**, Santa Fe de Bogotá DNP, 1991.
- PLANEACIÓN & DESARROLLO, Volumen XXIII, No. 1, Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia, Mayo de 1992.
- SARMIENTO ANZOLA, Libardo, "La Revolución Pacífica. Una Mirada Premoderna sobre los Derechos Sociales en Colombia", en **Economía Colombiana** N° 238, Bogotá, Febrero-Marzo de 1992.
- STALLINGS, Bárbara and Robert Kauffman (editores), **Debt and Democracy in Latin America**, Boulder, Westview Press, 1989.
- WILLIAMSON, John (Editor), **Latin American Adjustment: How Much Has Happened?**, Washington DC, Institute for International Economics, 1990.